

# Una masacre para justificar la intromisión de Estados Unidos en Brasil

Ariela Ruiz Caro\*

En un escenario en el que el gobierno de Donald Trump tiene una grosera y descarada actitud injerencista en nuestra región, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, miembro del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro, ordenó un operativo conjunto de la Policía Civil y Militar, con 2.500 agentes en dos favelas de la ciudad de Rio de Janeiro, para capturar a integrantes del *Comando Vermelho*, una de las principales bandas narcotraficantes del país que derivó en una masacre, la más letal de la historia reciente brasileña.



La denominada Operación de Contención, realizada el martes pasado, que dejó más de 130 fallecidos y 110 detenidos, se inscribe en la estrategia de campaña de la ultraderecha brasileña para las elecciones presidenciales de octubre de 2026 y fue realizada bajo la exclusiva responsabilidad del gobernador Castro. Esta ha generado el repudio y la condena de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de *Human Rights Watch*, entre otros, como veremos más adelante.

## La alianza Trump-Bolsonaro

El gobernador Cláudio Castro no informó ni coordinó las acciones con el gobierno federal, pero tuvo tiempo para enviarle al gobierno de Estados Unidos, meses antes, un informe sobre el *Comando Vermelho*, en el que lo calificó como organización terrorista con ramificaciones activas en Estados Unidos. Según la CNN, el informe fue entregado al consulado de Estados Unidos en Río de Janeiro. El objetivo de informar a Washington consistiría en erigirse como los interlocutores y adalides de la cooperación con las autoridades estadounidenses en la lucha contra ese cartel. Además, al promover la calificación de estos grupos criminales como terroristas, se alinean con la política estadounidense que les permitiría una mayor injerencia, en Brasil. ¿Quién mejor que Estados Unidos para proteger una sociedad amenazada por el crimen? Proyectar esa imagen podría ayudar en la campaña electoral.

En mayo de este año, una comisión de legisladores de Brasil mantuvo una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos con el objetivo de pedirle al gobierno de ese país que declare terroristas a las bandas narcotraficantes *Primeiro Comando da Capital* (PCC), la mayor de Brasil, y *Comando Vermelho*. En la reunión participaron el senador Flávio Bolsonaro, hijo menor de Jair, y el diputado Paulo Bilynskyj, respectivos líderes de las comisiones de Seguridad Pública de las cámaras legislativas. Ambos legisladores dijeron disponer de un informe de inteligencia que vincula al PCC y al *Comando Vermelho* con la milicia libanesa Hizbulá y que las bandas brasileñas tenían tentáculos con Estados Unidos.

En esta línea, días antes de la masacre, Flávio Bolsonaro le pidió a las autoridades estadounidenses expandir hacia Brasil la ilegal campaña militar que Estados Unidos desarrolla frente a las costas de Venezuela y Colombia contra pequeñas lanchas que supuestamente transportan drogas y amenazan la seguridad interna de ese país. Según el Alto Comisionado de la ONU los asesinatos cometidos en el Mar Caribe, y más recientemente también en el Pacífico, son “ejecuciones extrajudiciales”, ilegales bajo el derecho nacional e internacional. Al 30 de octubre han sido bombardeados 15 botes en los que han fallecido 61 personas. Sobre los tripulantes asesinados, ni siquiera saben sus nombres ni hay pruebas de que transportaban drogas. La renuncia del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, a mediados de octubre, es atribuida a la opacidad e ilegalidad de estos actos.

Pero al senador Bolsonaro eso le parece fantástico. El 3 de octubre en la red social X posteó un mensaje del secretario de guerra estadounidense Pete Hegseth sobre un ataque reciente a dichas embarcaciones y escribió en inglés: “¡Qué envidia! He oido que hay barcos así en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con drogas. ¿No quieren pasar unos meses aquí y ayudarnos a combatir estas organizaciones terroristas?”. Pedirle al pte Trump que intervenga en Brasil con el pretexto de que amenazan su seguridad nacional es música para los oídos para alguien que aspira a ser el emperador del mundo. La arrogancia y la adulación son caras de la misma moneda.

La publicación tuvo lugar mientras la diplomacia brasileña trabajaba para concretar un encuentro bilateral entre los presidentes Lula y Donald Trump, que tuvo lugar el domingo 26 en Kuala Lumpur, Malasia, en el marco de la cumbre de la Asociación de Países del Sudeste de Asia (ASEAN). Este tenía como uno de sus objetivos lograr que Estados Unidos eliminara los aranceles del 50% impuestos a las exportaciones brasileñas a su país, lo cuales fueron anunciados al finalizar la Cumbre de los BRICS de Río de Janeiro, realizada el 6 y 7 de julio, en la que Lula tuvo un rol protagónico, en represalia por el proceso judicial que se llevaba a cabo contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Como se recordará, el diputado Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del expresidente, actualmente radicado en Texas, promovió públicamente sanciones contra Brasil por el juicio a su padre. Contra viento y marea, y a pesar de la presión y los chantajes de Trump, Jair Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre a 27 años de prisión por tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y como miembro de una organización criminal armada dedicada a desacreditar el sistema electoral. Asimismo, por incitar ataques a las instituciones democráticas, articular medidas excepcionales y liderar una “organización criminal” que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.

## **Choque de opiniones**

La masacre en los barrios humildes de Río de Janeiro dio lugar a que el juez Alexandre de Moraes convocara al gobernador Cláudio Castro a dar explicaciones el 4 de noviembre. Además, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados le ha enviado al fiscal general Paulo Gonçalves un pedido formal para que se abra una investigación y se considere la prisión preventiva del gobernador Castro, por el operativo policial en las favelas. En el documento, los nueve diputados firmantes indican que existen “pruebas contundentes de haber sobrepasado los límites de la ley, la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos”.

Claudio Castro ha dicho que el gobierno federal los había dejado solos, lo que es absolutamente falso. En Brasil, cualquier Estado Federado tiene autonomía para todas las áreas de gestión, incluida la seguridad pública. Solamente cuando un Estado se declara incapaz de enfrentar un desafío con sus propios recursos, este oficializa el pedido de ayuda al gobierno federal. Cuando ello ocurre, en el caso de la seguridad pública, el gobierno federal decreta una ley de emergencia denominada Garantía de la Ley y del Orden (GLO). El gobernador del Estado de Río de Janeiro nunca solicitó la GLO.

Por otro lado, el gobierno de Lula encaminó a principios de año una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que prevé una acción coordinada de todos los entes federados bajo la tutela del Ministerio de Justicia (Gobierno Federal), para una estructura centralizada de información y acciones contra el crimen organizado, considerado actualmente “el mayor riesgo para nuestras instituciones, el estado de derecho y la democracia misma”. Sin embargo, las fuerzas políticas de la derecha, hasta el momento, no han aceptado esta propuesta de PEC del gobierno de Lula, pues dicen que disminuiría la autonomía de los estados.

## **Rechazo de las organizaciones internacionales**

La CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA, publicó un comunicado el viernes 31 en el que no solo exige al Estado a investigar los hechos, considerando toda la cadena de mando, sancionar a las personas responsables y garantizar una reparación integral a las víctimas y sus familiares, sino que señala que el operativo se inscribe en un patrón persistente de violencia policial en Río de Janeiro, cuyas víctimas son en más de un 85% personas afrodescendientes. La Comisión destaca que estos datos evidencian un patrón de perfilamiento racial, y reflejan la continuidad de un modelo de seguridad centrado en el uso excesivo de la fuerza y en la criminalización de la pobreza. La CIDH reconoce la gravedad del flagelo del crimen organizado pero expresa preocupación por la persistencia del paradigma de “guerra al crimen”, que deshumaniza a las víctimas y ha demostrado ser ineficaz como estrategia de seguridad pública para reducir los niveles de violencia. En este contexto, es urgente que las autoridades brasileñas, incluidas aquellas a nivel estatal, reformulen sus políticas contra el crimen organizado con un enfoque en los derechos humanos, centrado en las víctimas y con participación social, de conformidad con los estándares interamericanos.

El colombiano Gustavo Petro es el único presidente de la región que ha criticado al gobernador de Río de Janeiro al haber calificado el operativo policial de en las favelas como “barbarie”. “Dolor de pobres. La barbarie es el común denominador de las extremas derechas”, escribió Petro en X y comparó el operativo con la peor época del paramilitarismo en Colombia, cuyas alianzas con el ejército dejaron una estela de sangre.

## **Preparando la narrativa**

La masacre del 28 de octubre ha acelerado la apuesta de la ultra derecha por impulsar la mano dura en Brasil y activar la aprobación de una propuesta para clasificar como “organizaciones terroristas”

al *Comando Vermelho* y al PCC. En Paraguay, el gobierno ya denominó a las dos organizaciones como terroristas, a través de un decreto.

La narrativa para justificar la intromisión de Estados Unidos en los países de la región ha reemplazado el peligro del comunismo por el del narcoterrorismo, sin mencionar, por supuesto, que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y que solo se preocupa por erradicarlo desde el lado de la oferta.

Los hechos recientes indican que, conforme se acerque el inicio de la campaña electoral, le endilgarán a Lula debilidad para combatir el narcotráfico y hasta podrían inventarle algún cargo de *lidercinho* del *Comando Vermelho*. Nada que sorprenda. A gobernantes que mantienen posturas soberanas se les pone piedras en el camino. Para los sumisos hay ayuda, cobijo y hasta aplausos, tal como se vio en las elecciones legislativas en Argentina, en la que Estados Unidos intervino en el mercado cambiario para facilitar el triunfo del partido del presidente argentino Javier Milei. Ni la corrupción expresada en cupos que cobraba su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia, a cargos electivos y públicos o entrevistas con su hermano presidente; ni el esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos por parte de la Agencia Nacional dedicada a personas con discapacidad, también organizado por Karina Milei; ni las estafas promovidas con criptomonedas auspiciadas por el presidente Milei, inclusive a ciudadanos estadounidenses; ni los vínculos con el narcotráfico de funcionarios muy cercanos a su gobierno importan si los gobernantes pertenecen al coro estadounidense.

\*Esta nota ha sido publicada por la autora en su columna [\*El Mundo en Foco\*](#) en Feminismo y Democracia MIRA, Americas.org